

sa, y los otros dos de su familia, conforme á las leyes 14, 15 y 18, tít. 16, part. 3ª, citadas por el C. Juez de Distrito.

Considerando segundo: que el de la circulacion de la otra peseta que dió Barron la noche del 21, aunque está plenamente probado, no lo está que fuese á sabiendas de que era falsa, como lo exige el artículo 674 del Código penal, ni hay en el caso ninguna de las presunciones legales que establece el artículo 675, para dar por probado que el expendedor de moneda falsa lo ha hecho á sabiendas: por estos fundamentos legales que son los mismos de la sentencia de primera instancia, y de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal, este Tribunal falla: que debía confirmar y confirma la sentencia del C. Juez de Distrito de Guanajuato, que absolvió á José Barron de los delitos de circulacion de las dos monedas falsas de que lo acusó el C. José María Castro, quedando en consecuencia, en absoluta libertad. Hágase saber; remítase la copia al Semanario Judicial, y elévese la causa á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así por esta sentencia definitiva lo proveyó el C. Magistrado primer suplente de este Tribunal de Circuito, en ejercicio por licencia del propietario, y lo firmó.—*V. Covarrubias.*—*Ramon Reynoso.*

Es copia que certifico. Querétaro, Abril 29 de 1873.—*Ramon Reynoso*, secretario.

Pedimento del C. Procurador General de la Nacion.

El Procurador general de la Nacion dice: Que en la presente causa seguida por el Juzgado de Distrito de Guanajuato contra José Barron por circulacion en dos distintas ocasiones de dos pesetas de cobre galvanizadas, no apareciendo de las diligencias practicadas al efecto que el acusado hubiera realmente circulado una de las monedas,

ni que con respecto á la otra lo hubiera hecho maliciosamente, se declaró por sentencia de 22 de Marzo del presente año que era de absolverse y se absolvía á José Barron del cargo de circulacion de moneda falsa. Este fallo confirmado en segunda instancia por el Tribunal de Circuito de Querétaro, en 25 de Abril, ha causado ejecutoria. Por lo que, y estando las actuaciones arregladas á derecho, el Procurador General es de opinion que se dé por revisado este proceso. México, Setiembre 30 de 1873.—*Altamirano.*

Auto de revision de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 19 de 1873. Por revisado y no apareciendo mérito para la responsabilidad, devuélvanse las actuaciones y archívese á su vez el Toca.—*J. M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*L. Velasquez.*—*Enrique Landa*, oficial mayor.

Es copia. México, Octubre 2 de 1873.—*Alejo Gomez Eguarte.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatelacas por el C. Lic. Rafael de las Piedras en representacion de D. Ramon C. Ortiz, contra la Gefatura de Hacienda, por el cobro de derechos de exportacion sobre \$ 15,568. 22 cents.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que con fecha 26 de Agosto último se presentó el C. Lic. Rafael de las Piedras, mayor de edad y vecino de esta capital y apoderado del Sr. D.

Ramon C. Ortiz, segun aparecia del poder que acompaño, y de que fué tomada razon, expone: que el dia 20 de dicho mes, ocurrió D. José R. de Villegas en representacion de su poderdante con el Gefe superior de Hacienda, solicitando guía para conducir 15,568 pesos, 22 centavos, de esta plaza á la de Monterey; pero que dicho funcionario para expedirla, exigía el pago del derecho de exportacion, fundándose en la orden telegráfica del Ministerio del ramo de 17 de Junio próximo pasado; y que para hacer constar el acto, se repitió ante el Escribano D. Gregorio Fernandez que exhibió en dos fojas útiles, y que encontrándose los comerciantes en la necesidad de remitir fondos para negocios, á diferentes puntos de la Nacion sin tener que exportarlos, lo que estrecha á su comitente á ocurrir ante la justicia federal, á fin de que las garantías individuales que otorga la Constitucion General sean efectivas; y que no solicita se obre en el caso urgentemente porque el conductor que debía llevar los fondos ha salido ya, necesitando esperar otro que debe llegar en breve, y esto le causa ya graves perjuicios que quiere evitar para lo futuro; y que con lo expuesto queda suficientemente indicado que la exigencia del Gefe Superior de Hacienda está comprendida en la fraccion primera del artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869, por considerar violadas las garantías individuales con su procedimiento, contrario á la ley vigente, sobre el derecho de exportacion segun la ley expedida por el Congreso de la Union en 31 de Mayo del año próximo pasado, por la que solo deben pagarse esos derechos cuando salgan de la Nacion para el extranjero, y se exportan realmente al verificarse; y que esto está bien puesto en razon, porque en los negocios mercantiles, varían por medio de combinaciones ó circunstancias que se presentan á cada momento, pues no habria inconveniente de que en el mismo Puerto se dejara de hacer la exportacion de caudales destinados al ex-

TOMO IV.—PARTE II.

trangero; y siendo derecho de exportaciones lo que lo causan, y no los que pasan sus fondos de un punto á otro de la Nacion: que la justicia que garantiza esos derechos, está sancionada por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que amparó á los Sres. Sandoval y Bulle, contra el pago de derechos de exportacion, que se los exigian por plata amonedada que se condujo al Puerto de Guaymas, y que en el caso presente no está comprendido su cliente en la disposicion que cita el Gefe Superior de Hacienda del Estado, porque el artículo segundo de la ley citada de Mayo, es bien claro en su texto y no puede modificarse por otra del Ministerio, estando fuera de sus facultades, y menos comunicada por parte telegráfica y que comprende el caso claramente, pues refiriéndose á las disposiciones de 16 de Julio y 9 de Diciembre de 1871, conforme á ellas no se puede exigir á su poderdante derechos de exportacion, dado el caso que de alguna manera se los pudiera tener por existentes después de la ley posterior del Congreso de la Union; que por lo que respecta á las disposiciones del Presidente de la República de 16 de Julio y 9 de Diciembre de 1871, se refieren solo á remisiones que se hagan para los Puertos, Aduanas fronterizas y los puntos en que se pase la línea del contrarresguardo, y que en ninguno de esos casos se encuentran los fondos que su comitente quiere remitir para Monterey en que comienza la zona libre: concluye considerando: que con aquellas disposiciones se han violado las garantías del libre ejercicio de trabajo, industria y comercio á que todos tienen derecho de contribuir, así como los que contienen los artículos cuarto, décimosesto y trigesimo de la Constitucion General; y que por último su cliente considera infundada la exigencia del Gefe Superior de Hacienda, porque supuesta la Orden del Ministerio, no es especial para él y las disposiciones citadas en ella, pues ha tenido noticia de que el Gefe de Hacienda ha expedido guías libres á D.

100

Samuel Heaven, para pasar \$ 22,000 por Monterey, por donde lo ha podido hacer su cliente, con la diferencia de que Heaven pidió guías para Matamoros, treinta y tres pesos pagando de derechos de exportacion; pero que no se encuentra respecto de su representado diferencia que la ley establezca acerca de él.

Por auto de 27 se mandó tomar razon del poder presentado por el C. Lic. Piedras y sacar copia de su curso, para que el C. Gefe de Hacienda informara con justificacion sobre su contenido y se corriera en seguida traslado al que suscribe para que pida lo que tuviera lugar en derecho.

Rendido el informe pedido á dicho ciudadano Gefe de Hacienda, expone: que la queja es infundada, porque la ley de 20 de Enero de 1869, en las tres fracciones de su art. primero, no señala el caso presente, que por analogía podía corresponderle al que dice: "por actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales;" porque la negativa á expedir un documento contra la Orden del Superior, no viola ninguna garantía, y mas cuando de la copia núm. 1 del telegrama que se cita, funda su disposicion en las leyes circulares correlativas de las de 16 de Julio y 9 de Diciembre de 1871, que unidas á la circular novísima de 24 de Mayo próximo pasado, de que acompaña copia bajo el núm. 3, dejan declarada la facultad del Ejecutivo, para disponer lo que crea mas conveniente á los intereses del Erario respecto de la exportacion, sin que se tenga derecho por los comerciantes á exigir guías para Monterey, como lo habian verificado anteriormente: que respecto de la ley de 31 de Mayo del año próximo pasado, en que se funda el Lic. Piedras, pudo valerle antes de la circular citada; por que habiendo ella aclarado la libertad de derechos que otorgaba el arancel de 19 de Enero de aquel año, para hacerse la exportacion de plata amonedada, quedaban sin efecto y sin rigor las disposiciones, tanto reglamentarias, como penales, sobre los re-

quisitos con que debian ampararse los caudales conducidos á los puertos y fronteras, es evidente que no tuvo fundamento su pedido, y por consecuencia será desechado por la justificacion é imparcialidad del juzgado: añade que podia ya cumplir si creyera que lo expuesto es suficiente para demostrar que la Gefatura no podia ser requerida y mucho menos exigírsele que expidiera guías para Monterey; y que habiendo otras manifestaciones accesorias en el negocio de que se trata, es de necesidad contestarlas alegando otras leyes que están vigentes, porque no es cierto que exigiera derechos por las guías que pretendia el comisionado del Sr. Ortiz para Monterey; pues lo que contestó fué, que no podia expedirlas para aquel punto; pero sí para Matamoros, porque allí debian de pagar los derechos de exportacion, como lo han verificado otros comerciantes; lo que prueba palmariamente, que la mayor parte de los caudales que se extraen, llevan por destino la salida del país; y como la situacion de la frontera se presta por su estension y circunstancias escepcionales, que esas cantidades salgan sin dar al fisco lo que le corresponde de derechos, se hace necesaria la negativa de expedir guías para Monterey y tener un cuidado y vigilancia especiales, sin que por eso puedan ofenderse los traficantes de numerario, pues lo único que se procura es el pago previo de los derechos para no exponerlos á que se defrauden en la frontera; y que ya otra vez, el año de 1854, se proveía el mal y el Gobierno decretó con fecha 19 de Mayo de aquel año:

"Que por ningun punto fronterizo, ó que esté á las márgenes del Rio Bravo y línea trazada últimamente entre la República y los Estados Unidos, podrá hacerse extraccion de numerario, sin guía expedida por la Administracion principal del respectivo departamento (hoy Gefatura de Hacienda del Estado) fronterizo, en que conste estar hecho el cobro de los derechos de circulacion y exportacion, sin que tampoco podrá ha-

ber tráfico de numerario con rumbo á la frontera, sino en los periodos establecidos para la salida de las conductas;" advirtiéndole, que el anterior decreto está vigente segun lo dispone el reglamento de Gefaturas de 15 de Julio de 1871; por lo que bajo todos conceptos, y por mas que se quiera desconocer el perfecto derecho del Supremo Gobierno y las facultades con que ha ordenado lo que contiene el telégrama de 17 de Junio de este año; agrega, que queriéndose apoyar el Sr. Piedras en la circunstancias de que Monterey no está mas allá de la línea del contrarresguardo, porque sin duda ignora que en el Saltillo hay una seccion del contrarresguardo, como consta del telégrama que le dirigió el C. Ministro de Hacienda con fecha 17 de Julio en la copia número uno; y que en cuanto á llamar la atencion del Juzgado, sobre la sancion de la Suprema Corte de Justicia á un juicio de amparo, protegiendo á los señores Sandoval y Bulle, contra el pago de derechos de exportacion que se les exigía en el Puerto de Guaymas, ha perdido su tiempo, por lo que el Juzgado tendrá presente el final del artículo segundo de la ley de 20 de Enero de 1869 que dice:

«La sentencia será siempre tal, que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose á protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que versa el proceso, sin hacer ninguna declaracion general respecto de la ley ó acto que la motivare;» y por último, que el ocurno tantas veces citado revela de tal modo la falta de razon, como lo he demostrado por las explicaciones anteriores, que hasta se ha ocurrido á una especie de denuncia, citando que la Gefatura expidió á Don Samuel Heaven guías para Monterey, libres de derechos, para demostrar que ha habido una desigualdad y una falta por su parte; y que muy lejos de perjudicar á nadie, pretendió conciliar los intereses del Señor Ortiz y los del Erario, indicando á su comisionado que podía hacerse la misma operacion que con el Señor Heaven, de que

en una proporcion de treinta y tres á veintidos mil pesos, sacara guías para Monterey, á lo que se negó, no obstante que le agregó que el Señor Viadero habia hecho igual negocio, por encargo del conductor Don Agustín Catarecha, autorizado por el C. Ministro de Hacienda, en vista de la necesidad de recursos para sostener las tropas de la tercera division que se encuentran en el Estado; concluyendo con pedir al Juzgado, con toda la confianza de que penetrado de las razones expuestas, que deshacen el fundamento ilusorio de que se sirvió el quejoso (que está probado con los documentos oficiales estar derogado el arancel de 1º de Enero del año próximo pasado, en la parte relativa,) se sirva fallar en favor de los intereses del Erario, negando el amparo solicitado por el representante de Don Ramon C. Ortiz por creerlo de justicia.

Por todo lo expuesto; vistos los documentos en que se funda el informe del C. Gefe de Hacienda y leyes que se citan como vigentes y expedidas en virtud de las facultades de que está revestido el Ejecutivo, para reformar el arancel de 1º de Enero de 1872.

Considerando: que el C. Gefe de Hacienda en virtud de sus atribuciones que le da el reglamento de 15 de Julio de 1871, tiene que velar por los intereses del Erario federal, para no consentir en dar guías para la extraccion libre de caudales á Monterey y fuera de la línea del contrarresguardo, y que con esa negativa, no se han violado las garantías individuales de los artículos 4º y 16 de la Constitución general de la República, pues el primero aunque garantiza á todo hombre para que ejerza la profesion, industria y trabajo que le acomode y se aproveche de sus productos, ni uno ni otro se le ha impedido al Sr. Ortiz por la negativa de la Gefatura; en cuanto al 16, la negativa del C. Gefe de Hacienda no ha causado molestia al Sr. Ortiz en su persona, familia, papeles ni posesiones; y aunque por el artículo 33 tienen derechos extranje-

ros á las garantías que otorga la Constitución, en la sección primera, título primero, también están obligados á contribuir para los gastos públicos de la manera que dispongan las leyes, y á obedecer y respetar todas las instituciones, leyes y autoridades del país, sujetándose á los fallos y sentencias de los tribunales, sin intentar otros recursos, y contra las disposiciones del Ejecutivo federal los que segun las leyes pueden ejercitar los ciudadanos mexicanos, como sucede en el presente caso; porque el Promotor fiscal es de opinion, que la solicitud de amparo del C. Lic. Rafael de las Piedras, en representacion del Sr. D. Ramon C. Ortiz, no está en el caso de la fracción primera del artículo primero de la ley en que se funda la queja, y que en consecuencia debe declararse, que no ha lugar al amparo pedido; y de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 16 de dicha ley, se le imponga la multa de cien pesos por lo inmotivado del recurso. Así lo cree de justicia; no obstante, la justificación del Juzgado determinará lo que extime conveniente. Zacatecas, 5 de Setiembre de 1873. —Firmado.—*Jesus M. Licona.*

Es copia. Zacatecas, 23 de Setiembre de 1873.—*Jesus M. Licona*

Alegato del C. Promotor fiscal.

Al Juzgado de Distrito.

El Promotor fiscal que suscribe, en uso del derecho que le concede el artículo 13 de la ley de 20 de Enero de 1869 y en cumplimiento de su deber expone; que es de desecharse el recurso de amparo promovido por el Sr. D. Rafael de las Piedras en nombre de D. Ramon C. Ortiz, y así lo pide al Juzgado, fundado en las consideraciones siguientes:

La orden del Ministerio de Hacienda de 16 de Junio próximo pasado, sobre que no se expidan guías por esta Gefatura, sino cuando vaya á exportarse el numerario, á

mas de estar en las facultades reglamentarias del Ejecutivo de la Nación, pues tiende á tomar una precaucion para evitar el contrabando, está en consonancia con la misma ley de 31 de Mayo de 1872, pues que no debiendo expedir guías esta Gefatura, sino para el dinero que va á exportarse á algun punto de la frontera mas allá de la línea del contrarresguardo, no encontrándose en este caso la cantidad en cuestion, porque segun el interesado no pasará de Monterey, no se puede decir agraviado en sus garantías por la orden del Ministerio de 16 de Julio último. Obsérvese ademas, que en esta orden comunica el Ministerio estar ya establecida en el Saltillo una sección del contrarresguardo; luego el dinero iba para un punto, en que se tiene por exportacion, y debe pagar previamente los derechos, conforme á las leyes de 16 de Julio y 9 de Diciembre de 1871.

Pero á mayor abundamiento, las facultades concedidas al Ejecutivo para reformar el arancel en todo lo que se relacione con los intereses de la Nación, pone el caso que nos ocupa fuera de la órbita de los juicios de amparo, pues suponiendo que á la ley de 31 de Mayo del año próximo pasado se debiese dar la inteligencia que le da el Sr. Lic. Piedras, la orden de 16 de Junio debería ser considerada como una reforma reglamentaria que cabe muy bien en las facultades naturales y constitucionales del Presidente de la República, quien aun sin la facultad expresada de reformar el arancel que menciona la circular de 24 de Mayo próximo pasado, y en cuya virtud ha revivido la observancia de las disposiciones de 16 de Julio, 26 de Setiembre y 9 de Diciembre de 1871, que da por derogadas el Sr. Piedras, tiene la atribucion constitucional y ordinaria de vigilar sobre que no se defraude los intereses del Erario, dictando las medidas conducentes á evitar el contrabando. ¿Y qué sería de la hacienda pública, si no pudieran sus administradores legítimos, oponerse á ese torrente que amenaza

desbordarse, de la inmoralidad con que de algun tiempo á esta parte se ha llegado á sistemar el contrabando?

Reproduce aquí los razonamientos expuestos en su pedimento de fecha 5 del corriente y concluye reasumiendo:

Primero: La Orden del Ministerio de Hacienda fecha 26 de Junio próximo pasado, está en consonancia con las leyes de 16 de Julio y 9 de Diciembre de 1871.

Segundo: Estas leyes han sido restablecidas por la circular de 24 de Mayo último, y son por consiguiente derogatorias de la de 31 de Mayo referido, en que se funda el quejoso.

Tercero: Restablecida la observancia de dichas leyes, con las facultades concedidas expresamente al Ejecutivo para reformar el arancel de 19 de Enero del año pasado, ni siquiera puede decirse que es contraria á la ley 6 extralegal, la aclaración del Ministerio, hecha en la Orden telegráfica de 10 de Junio citado.

Cuarto: En consecuencia, no hay violación de garantías, pues la Constitución no garantiza á los comerciantes ni á nadie, que el Ejecutivo no podrá dictar las providencias reglamentarias que se dirijan á evitar el contrabando desarrollado en nuestro país, con mengua de nuestros gobiernos y perjuicios de la Nación; por lo que debe ser desechado el recurso de amparo, de que pretende abusar con descrédito de una institución que ha conquistado la democracia en los últimos tiempos, en fuerza de largos ensayos, estudios y sacrificios.

Por tanto, al Juzgado pide, se sirva decretar como pide en este alegato, imponiendo al solicitante la multa de la ley. Es de justicia. Zacatecas, 12 de Setiembre de 1873.—Firmado.—*Jesus M. Licona.*

Es copia. Zacatecas, 23 de Setiembre de 1873.—*Jesus M. Licona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito

Zacatecas, 19 de Setiembre de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Rafael de las Piedras, en representación de Don Ramon C. Ortiz, contra el cobro del C. Gefe de Hacienda, de derechos de exportacion sobre quince mil quinientos sesenta y ocho pesos, veintidos centavos (\$15,568,22) que no vá á exportar, resistiéndose á expedir guía libre de derechos para conducir la cantidad mencionada de esta plaza á Monterey, creyendo violadas en la persona de su poderdante las garantías que protegen los artículos 5, 16 y 33 de la Constitución general.

Visto el escrito en que se introduce el recurso, de fecha 26 de Agosto último, en el que se expresa, que Don José Villegas á nombre de Don Ramon C. Ortiz pidió á la Gefatura de Hacienda, en 20 de Agosto citado, una guía para conducir de esta plaza á la de Monterey la cantidad de quince mil quinientos sesenta y ocho pesos, veintidos centavos (15,568,22) cuyo documento se le negó por la Orden telegráfica del Ministerio de Hacienda de 17 de Junio último; que con este procedimiento se infringe la ley de 31 de Mayo de 1872, que manda se paguen derechos por la exportacion de caudales, habiéndolo declarado así la Suprema Corte de Justicia, amparando á los Señores Sandoval y Bulle contra el pago de derechos en Guaymas, por sentencia de 17 de Mayo próximo pasado, citando en su demostración el artículo segundo de la ley de 31 de Mayo referida, diciendo que no está comprendido en la Orden de 17 de Junio, y que ni por las leyes de 16 de Julio y 9 de Diciembre de 1871 pueden cobrarse los derechos de exportacion, dado caso que de manera alguna se les pudiera tener por existentes despues de la ley posterior decretada por el Congreso, de 31 de Mayo de 1872: que las disposiciones de Julio y Diciembre hablan de remisiones para los puertos, aduanas fronterizas y puntos en que se

pase la línea del contraresguardo, porque en dicha Capital de Monterrey comienza la línea, concluyendo coa manifestar, que se ataca el libre ejercicio del trabajo, de la industria y del comercio, y el derecho que todos tienen para no contribuir mas que con lo que determinan las leyes y en los casos en ellas comprendidos (fojas 3, 4 y 5).

Vista la protesta que se acompaña al anterior escrito (fojas 1 y 2).

Visto el informe del C. Gefe de Hacienda fecha 30 del mismo mes de Agosto, en cuyo documento se expone: que no está comprendido el amparo promovido en ninguna de las tres fracciones del artículo primero de la ley de 20 de Enero de 1869, porque la negativa de expedir un documento por orden superior, no viola ninguna garantía; mucho menos cuando la negacion se funda en las leyes, siendo facultad del Ejecutivo disponer lo que mas convenga á los intereses del Erario respecto de la exportacion, sin que haya derecho de parte de los comerciantes para pedir las guías para Monterrey como antes lo habian hecho; que la ley de 31 de Mayo de 1872 pudo hacerse valer antes de expedirse la circular de 24 de Mayo del presente año, pues por esta quedaron vigentes las leyes reglamentarias y penales, para los caudales que se dirijan á los puertos y fronteras; que la Gefatura se negó á dar las guías para Monterrey; pero no para Matamoros donde debian pagarse los derechos, como lo hizo con otros comerciantes, lo cual prueba que el dinero es para la exportacion, prestándose la situacion de la frontera al contratando, exigiéndose el pago de derechos para evitarlo, por lo que se dió el decreto de 19 de Mayo de 1854, cuyo artículo primero copia: que esta ley está vigente por el artículo 68 capítulo 10 del Reglamento de Gefaturas de Hacienda de 15 de Julio de 1871; de manera, que esto confirma la facultad con que está dada la orden telegráfica de 17 de Junio: que Monterrey está mas allá de la línea del contraresguardo, habiendo una seccion de este

en el Saltillo: que no se pueden citar ejecutorias en estos juicios, por la ley de 20 de Enero de 1869, pues el artículo segundo de ella, dice: que son resoluciones especiales las del Juzgado, y por lo mismo, nada influye la sentencia en favor de Sandoval y Bulle: que la denuncia que se hace por los documentos expedidos al Señor Heaven, la Gefatura no ha obrado con desigualdad, ni por preferencia, y lo que ha hecho ha sido previa autorizacion superior: y en fin, que ha procurado evitar los fraudes al Erario, sin ser hostil al comercio, cumpliendo con su deber (fojas 14 á 16).

Vistos los documentos que se acompañan al precedente informe, y son las copias autorizadas del parte teleográfico de 17 de Junio del Ministerio de Hacienda, fojas 11; del telegrama de 26 del mismo mes, fojas 12, y de la circular de 24 de Mayo del corriente año, fojas 13.

Visto el pedimento del C. Promotor fiscal de fecha 5 del actual, en el que despues de hacer la relacion del negocio, concluye con pedir se niegue el amparo, imponiéndose la multa de la ley al solicitante por no haber violacion de las garantías que se designan, pues no se le impide la libertad en su trabajo al Señor Ortiz ni se le molesta en su persona ó intereses, estando obligado á contribuir con lo que le corresponda para los gastos públicos y á obedecer las leyes y autoridades de la Nacion, fojas 8, 9, 10, 17, 18 y 19.

Visto el alegato del Lic. de las Piedras, que dice: que en méritos de justicia debe declararse, que la justicia de la Union protege y ampara al representado: que para alegar, seguirá el orden del informe del gefe de Hacienda: destruyendo sus razonamientos, que la orden del Ministerio, no porque emana de él, deja de violar las garantías individuales, puesto que estas no dependen de las disposiciones del Ministerio, y el juicio de amparo esta establecido aun contra los actos del presidente de la Nacion: que los partes teleográficos presentados no hacen fé en

juicio, no tienen valor ni carácter auténtico: que la circular de 24 de Mayo que no se citó al negar las guías, y solo hasta el informe, no puede derogar la ley de 31 de Mayo de 1872 para la cual se necesita otra ley; y que la referida circular solo fué dada para resolver algunas dudas, como se vé de su texto: que por esto no hay necesidad de tocar la cuestion de si el presidente de la Nacion tenia facultades para derogarla, cuya probabilidad está por la negativa, tanta porque la facultad de reformar el arancel no la puede conservar siempre, como porque habiendo una resolucion posterior del legislador, deberian estimarse limitadas ó revocadas las facultades con anterioridad, á menos que puedan estar establecidos constitucionalmente dos poderes legislativos, y que lo que un día hacia el Congreso general al día siguiente lo podia nulificar el ejecutivo, lo que es un contra principio: que la circular puede concordarse con la ley expidiéndose las guías, no por los derechos de exportacion, sino para conocimiento de las oficinas de hacienda, á fin de evitar el contrabando, viéndose en los partes telegráficos, cuando mas, la opinion errónea del ministro, debiendo servir de norma á los ciudadanos, solo las leyes expedidas con todos los requisitos: que la negativa de la expedicion de los guías para Monterey, la demuestra la protesta, en cuyo procedimiento ha habido violencia y un ataque á la libertad del comercio: que su poderdante no ha hecho las transacciones que otros comerciantes, por no tener obligaciones de pagar derechos que no debe, y sufrir perjuicios indebidos, abriéndose ademas la puerta á la especulacion de los que tienen negocios en el extranjero sobre los que no los tienen: que no dar guías libres de derechos para Monterey, es exigir los de exportacion: que las leyes que cita la gefatura de hacienda, no solo se limitan á que se paguen los derechos de exportacion, sino tambien previenen los documentos con que deben ampararse los caudales que se diri-

jan al rumbo de la frontera, á la misma frontera, á los que entron en la línea del contrarresguardo y á los puertos; ¿porqué no se pagan los derechos de exportacion de un punto al otro en el interior, se entenderá que no necesitan los caudales documento alguno para caminar? nada dice el jefe de hacienda, como si se tratara de poner una celada á su comitente, porque las leyes no exigen pago de derechos ni caucion para los capitales que no se exporten: que si la mente del Ministro ha sido obligar indirectamente al comercio del interior, á que pague los derechos de exportacion, negando las guías de circulacion, da de mano á la ley del soberano Congreso y ha hecho al jefe de hacienda que la infranja, debiendo ante todo cumplirse con ella y dejar libre el ejercicio del trabajo: que los negocios hechos con la gefatura por D. Samuel Heaven y D. Manuel Viadero, confirman su idea: que las instrucciones para proveer de fondos á la tercera division, no bastan; por que no está en la facultad de ninguna autoridad ó funcionario hacer transacciones con los derechos del fisco, pues con los arreglos particulares de rebajas y concesiones aparece la injusticia, el agravio, la ilegalidad, la violacion: que por lo expuesto por el jefe de hacienda sobre punto tan delicado, aparece y se comprende, que la expedicion de guías libres para plata amonedada con destino á Monterey, se ha reservado para hacer negocios que perjudiquen al erario y á la sociedad en último resultado: que no expone estas razones por denuncia, como se ha comprendido, sino para hacer valer los derechos de su poderdante cuyas garantías se han violado: que el jefe de hacienda no ha presentado la Orden, parte telegráfica ó comunicacion en que se le dieron facultades para entrar en arreglos, y nada basta para justificar la negativa para dar las guías con direccion á Monterey: que el reglamento de 4 de Junio de 1870, no menciona para la residencia del contrarresguardo el Saltillo, sin que la colocacion en ese punto de

una seccion, pudiera tener efecto contra los que no tuvieran la noticia, que conoce ahora por el parte que acompañó el jefe de hacienda en su informe, no influyendo esto contra el ignorante y el impedido: que establecido el contraresguardo en el Saltillo, mas necesaria es la guía, por ser rumbo á la frontera: que citó la sentencia pronunciada á favor de Sandoval y Bulle, no como ejecutoria, sino por la respetable opinion de la Suprema Corte: que el pedimento del ciudadano promotor fiscal aplicándolo juridicamente, favorece su intencion; y por último, que respecto de la multa que pide se le imponga, dice, que no en todos los casos que se niega el amparo se impone la pena, como se ve lo hizo la Suprema Corte en el juicio promovido por D. Fernando Gomez Virgen, contra el acuerdo de la asamblea municipal de esta ciudad, (fojas 23 á 30.)

Visto el alegato del C. Promotor fiscal, en que expone se deseche el amparo por las siguientes consideraciones: que la Orden de 16 de Junio está expedida en virtud de las facultades reglamentarias del Ejecutivo, tanto para evitar el contrabando, como por la especial de reformar el arancel; y está en consonancia con la ley de 31 de Mayo de 1872: que la linea se halla establecida desde el Saltillo y deben pagarse previamente los derechos conforme á las leyes de 16 de Julio y 9 de Diciembre de 1871: que las facultades concedidas para reformar el arancel en todo lo que se relaciona con los intereses de la Nacion, pone el caso fuera de la órbita del amparo, pues aun suponiendo que la ley de 31 de Mayo de 1872 se entendiera como lo creó el Lic. Piedras, la Orden de 16 de Junio es una reforma reglamentaria, sin contar con las facultades á las que se refiere la circular de 24 de Mayo, reviviendo la observancia de las leyes de 16 de Julio, 26 de Setiembre y 9 de Diciembre de 1871, existiendo ademas las facultades ordinarias y constitucionales para vigilar que no se defrauden los intereses del

erario, dictando las medidas conducentes á evitar el fraude, siendo preciso poner un dique al torrente del contrabando sistemado; y reasumiendo, concluye con pedir se declare; Primero: Que la Orden del Ministro de Hacienda de 26 de Junio próximo pasado, está en consonancia con las leyes de 16 de Julio y 9 de Diciembre de 1871. Segundo: Que estas leyes han sido restablecidas por la circular de 24 de Mayo último, y derogatorias de la de 31 de Mayo de 1872, en que se funda el quejoso. Tercero: Que restablecida la observancia de dichas leyes, con las facultades concedidas expresamente al Ejecutivo para reformar el arancel de 1º de Enero de 1872, ni siquiera puede decirse que es contraria ó extralegal la aclaracion del Ministerio hecha en la Orden telegráfica de 16 de Junio citado. Cuarto: Que no hay violacion de garantías, pues la Constitucion no garantiza á los comerciantes ni á nadie que el Ejecutivo no pueda dictar las providencias reglamentarias que se dirijan á evitar el contrabando, desarrollado en nuestro país, con mengua de nuestros gobiernos y perjuicio de la Nacion, debiéndose desechar el recurso de amparo de que se pretende abusar, con descrédito de una institucion que ha conquistado la democracia en los últimos tiempos á fuerza de largos ensayos y sacrificios, reproduciendo la peticion de que se imponga al solicitante la multa de la ley (fojas 21 á 22).

Visto el auto de citacion para sentencia, fojas 19 frente, y todas las demas constancias de este juicio.

Resultando: Primero: que está plenamente probada la negativa de la Jefatura de Hacienda para expedir las guías pedidas para Monterey por D. Ramon C. Ortiz, con el objeto de remitir á aquella plaza, la cantidad de quince mil quinientos sesenta y ocho pesos veintidos centavos.

Segundo: que igualmente está probado que la Jefatura de Hacienda, hizo saber al representante del referido Ortiz, las leyes,

circulares y órdenes que les impedian expedir el documento.

Tercero: que está publicada en 12 de Diciembre de 1872 la ley dada por el Congreso de la Union en 9 del mismo, en cuya ley dice en el artículo único, fracción tercera: "Se faculta al Ejecutivo.....para reformar el *Arancel de Aduanas marítimas y fronterizas* de 1º de Enero de 1872, y regularizar las cuotas en él establecidas, *no alterando lo dispuesto actualmente en los Estados, sobre cobro del derecho de consumo*", cuya ley se publicó en esta Capital en el Periódico Oficial del Estado, número 139, tomo 3º, correspondiente al Jueves 26 de Diciembre del mismo año.

Cuarto: Que también está publicada en el Estado la circular de 24 de Mayo último, en el Periódico Oficial, tomo 4º número 94, correspondiente al Jueves 12 de Junio del presente año.

Quinto: Que además de la referida circular, se publicó otra, sobre reforma del arancel con fecha 18 de Febrero último, número 51 tomo 7º del Diario Oficial.

Sesto: Que en el mismo periódico citado, en el número 130 tomo 7º correspondiente al 10 de Mayo último, se encuentra publicada la parte expositiva del arancel reformado, firmada en dos del mismo mes por los CC. J. M. Iglesias, J. Castañeda, G. Prieto, M. Payno y J. F. Alvarez.

Setimo: Que el reglamento del Contrarresguardo, vigente, no es el de 4 de Julio de 1870, sino el de 18 de Noviembre de 1872, publicado por el Diario Oficial en los números 13, 14, 15 y 16 del tomo 7º correspondientes a las mismas fechas del mes de Enero próximo pasado.

Octavo: Que por las copias autorizadas por la Jefatura de Hacienda, está probada la existencia de las órdenes del Ministerio de fecha 16 y 17 de Junio último, expedidas con anterioridad al acto de Don Ramon C. Ortiz de pedir las guías y

Noveno y último: Que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el amparo

TOMO IV.—PARTE II.

de los Sres. Sandoval y Bulle se pronunció el 17 de Mayo último, antes de que fuera expedida la circular de 24 del mes citado y que no se conoce de una manera auténtica, sino por su publicación en el Foro, número 17 correspondiente al 27 de Junio próximo pasado.

Considerando, Primero: Que por la ley de 12 de Diciembre de 1872, es innegable la facultad que tiene el ejecutivo para reformar el arancel, bajo la única restricción de respetar lo establecido respecto del derecho de consumo, en los Estados.

Segundo: Que la ley antes referida es posterior a la de 31 de Mayo de 1872, y por consiguiente no puede decirse que ésta limita o restringe a aquella.

Tercero: Que las aclaraciones del ejecutivo al arancel de 18 de Febrero y 24 de Mayo últimos, han sido dadas estando reunido el Congreso de la Union, sin que se haya reclamado en el seno del expresado Congreso, contra esas resoluciones de un carácter verdaderamente legislativo.

Cuarto: Que lo que antecede y el hecho de haberse publicado en el Periódico Oficial la parte expositiva del arancel, reformado por la comisión nombrada con ese objeto por el ejecutivo, demuestra que se encuentra en el pleno goce de las facultades delegadas, y que las circulares expedidas hasta ahora, no tienen mas carácter que el de interinas, mientras se publica en un solo cuerpo el nuevo arancel.

Quinto: Que la circular de 24 de Mayo último contiene disposiciones reglamentarias que están comprendidas en las facultades ordinarias del ejecutivo, en la fracción primera del artículo 85 de la Constitución general.

Sesto: Que en la parte que reforma la citada circular a la ley de 31 de Mayo de 1872, debe estimarse como suficiente la delegación que hace al ejecutivo la ley de 12 de Diciembre del mismo año.

Sétimo: Que no hay contrapropósito en que se haya concedido al ejecutivo la de-

legación para legislar sobre las reformas del arancel, sin despojarse el Congreso de la Union de las facultades que tiene por su naturaleza y constitucion, pues en tiempos pasados tenemos varios ejemplos de iguales hechos considerados como legales, entre otros la ley de 22 de Julio de 1863, para arreglar los denuncios y enagenacion de los terrenos baldios, y en la misma ley de 12 de Diciembre de 1872, se le concede la facultad de legislar ferrocarriles, t  mbre y ense  anza.

Octavo: Que todos los considerandos anteriores, son bastante claros, y que solo la ignorancia de las leyes que se citan,    una hostilidad manifiesta contra las autoridades, puede hacer que se sostenga un juicio en los t  rminos en que lo ha promovido D. Ramon C. Ortiz, desconociendo resoluciones dictadas legalmente por las autoridades leg  timas,    quienes deben reconocer y sugestarse, tanto los mexicanos como los extranjeros.

Noveno: Que usando el ejecutivo de la Union de las facultades delegadas y durando aun estas, por la circular de 24 de Mayo   ltimo, est  n vigentes las leyes de 16 de Julio y 9 de Diciembre de 1871, el art. 68 del reglamento de Gefaturas de Hacienda y todas las dem  s disposiciones concordantes, por haberse revivido su observancia.

D  cimo: Que el reglamento del contraresguardo de 4 de Julio de 1870, est   derogado por el de 18 de Noviembre de 1872, y este mismo, sujeta    lo que establece el art. 82, es decir: que puede modificarse segun aconseje la experiencia, aprob  ndose las modificaciones por el Presidente de la Rep  blica; de manera, que puesta la secci  n del contraresguardo en el Saltillo, por disposici  n del Ministerio de Hacienda, aunque no estuviera comprendida la resoluci  n en el   ltimo reglamento, debe considerarse como una reforma legalmente hecha, que debe surtir sus efectos, sin que pueda admitirse la ignorancia de este hecho que ha tenido lugar desde Junio   ltimo, mucho me-

nos para promover un juicio que se funda en la ignorancia real y verdaderamente voluntaria.

D  cimo primero: Que las   rdenes telegr  ficas comunicadas por el Ministerio de Hacienda en 16 y 17 de Junio   ltimo, deben considerarse como comunicaciones oficiales para la Gefatura de Hacienda, y en el Juzgado su copia certificada, debe estimarse como la de un documento autentico, que hace f   y tiene valor en juicio y fuera de   l.

D  cimo segundo: Que las ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia no pueden alegarse en los juicios de amparo, como se determina en el art. 26 de la ley de 20 de Enero de 1869, y la que recay   en el juicio promovido por los Sres. Sandoval y Bulle tiene fecha 17 de Mayo,   poca en que no se habia expedido la circular de 24 del mismo, por lo que no estaba vigente mas que pura y simplemente la ley de 31 de Mayo de 1872 que se aplic   en su estricto sentido; y que tal vez, si antes se hubiera dado la circular citada del 24, el fallo de la Suprema Corte no hubiera sido el mismo, lo que hace mas palpable el que las ejecutorias no deben citarse, pues no todos los casos, ni sus circunstancias, son iguales para aplicarles una misma regla.

D  cimo tercero: Que establecida la legalidad y vigor de la resoluci  n del ejecutivo as   como la de las   rdenes y circulares del Ministerio de Hacienda, la negativa de la expedici  n de las gu  as para Monterey por la Gefatura de Hacienda, est   dentro de la   rbita de sus facultades y hecha en cumplimiento de sus deberes.

D  cimo cuarto: Que la responsabilidad que se denuncia del Ministerio de Hacienda y de la Gefatura, por las transacciones hechas con los comerciantes, no corresponde    este juicio, sino que debe ventilarse por separado y ante quien corresponda.

D  cimo quinto: Que las leyes declaradas vigentes, son generales para todos los ciu-

dadanos y extranjeros y sus efectos deben recaer igualmente sobre ellos.

Décimo sexto: Que no se ha registrado la casa de D. Ramon C. Ortiz ni impedido su trabajo, exigiéndole solo el pago de un impuesto establecido legalmente por disposiciones anteriores que están en obligacion de satisfacer mexicanos y extranjeros, y en consecuencia no existe la violacion de las garantías que protegen los artículos 4, 16 y 33 que que se queja Ortiz, y por último,

Décimo sétimo: Que para deducir los derechos ante los tribunales, no hay necesidad de hacer apreciaciones insultantes que por si son irrespetuosas, como las que contiene el alegato del C. Lic. Rafael de las Piedras, contra el C. Ministro de Hacienda y la Gefatura del mismo, ramo de conformidad con los anteriores, resultando y considerando lo dispuesto con la ley de 20 de Enero de 1869, la de 4 de Mayo de 1857 en su artículo 168 y lo pedido por el C. Promotor fiscal, sentenciando definitivamente este juicio, el Juzgado declara.

Primero: Que la Justicia de la Union no protege ni ampara á D. Ramon C. Ortiz contra la Gefatura de Hacienda del Estado que le negó las guías que pidió para conducir á Monterey la cantidad de quince mil quinientos sesenta y ocho pesos, veintidos centavos de Zacatecas á Monterey, y ese funcionario para expedirla, exigía se pagase el derecho de exportacion, exponiendo que obraba así por orden telegráfica del Ministro de Hacienda: que no llevando á exportar la referida cantidad, sino á trasladarla de uno á otro de los puntos indicados, no estaba en el caso de pagar los derechos de exportacion que se le cobran, teniendo en su apoyo la ley de 31 de Mayo de 1872: que estorbándose con el procedimiento del Gefe de Hacienda, el libre ejercicio del trabajo y el comercio, y no habiendo derecho para exigir mas impuestos que los establecidos por las leyes y de los casos en ella comprendidos, aquel procedimiento viola las garantías que la Constitucion de la República en sus artículos 4º y 16, otorga al representante del promovente. Vistas las constancias de autos y considerando: que el

Segundo: se impone á D. Ramon C. Ortiz la multa de cien pesos, que entrará en la Gefatura de Hacienda, confirmado que sea este fallo por la Suprema Corte de Justicia.

Tercero: Por la irrespetuosidad del alegato del C. Lic. Rafael de las Piedras, se le impone á éste la multa de cincuenta pesos, presentando el correspondiente recibo de la Gefatura de Hacienda para agregarlo á estos autos y aplicándose á los objetos señalados en el artículo 138 del Código Penal.

Cuarto: Hágase saber, publíquese en el Periódico Oficial del Estado, saquése las

copias respectivas, para el Semanario Judicial y remítanse estos autos para los efectos legales á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, reponiéndose el papel comun de que se ha hecho uso con el del sello correspondiente. El C. Juez de Distrito lo decretó y firmó, Doy fé.—Firmado.—*Manuel L. Solano.*—*Luis G. Chavez*, secretario.

Es copia que certifico. Zacatecas, Setiembre 26 de 1873.—*Luis G. Chavez*, secretario.

Ejcutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 16 de 1873. Visto el recurso de amparo que en 26 de Agosto último, promovió en la ciudad de Zacatecas ante el Juez de Distrito del Estado del mismo nombre, el Lic. Rafael de las Piedras, como apoderado de D. Ramon C. Ortiz, alegando: que el día 20 del mismo Agosto D. José Villegas, á nombre de Ortiz, se presentó al Gefe Superior de Hacienda pidiéndole una guia para conducir quince mil quinientos sesenta y ocho pesos, veintidos centavos de Zacatecas á Monterey, y ese funcionario para expedirla, exigía se pagase el derecho de exportacion, exponiendo que obraba así por orden telegráfica del Ministro de Hacienda: que no llevando á exportar la referida cantidad, sino á trasladarla de uno á otro de los puntos indicados, no estaba en el caso de pagar los derechos de exportacion que se le cobran, teniendo en su apoyo la ley de 31 de Mayo de 1872: que estorbándose con el procedimiento del Gefe de Hacienda, el libre ejercicio del trabajo y el comercio, y no habiendo derecho para exigir mas impuestos que los establecidos por las leyes y de los casos en ella comprendidos, aquel procedimiento viola las garantías que la Constitucion de la República en sus artículos 4º y 16, otorga al representante del promovente. Vistas las constancias de autos y considerando: que el

procedimiento reclamado del Gefe Superior de Hacienda de Zacatecas, se funda segun el mismo, en la prevencion de la circular de 24 de Mayo de este año y disposiciones conducentes que menciona: que esta circular no debe estimarse como el fundamento pretendido, por no estar comprendida en las disposiciones expresadas en el artículo 19 fracción 1ª letra D de la ley de presupuestos de 31 de Mayo tambien de este año, ley que por la materia sobre que versa, es la ley correspondiente al caso en cuestion: y por último, que supuesto el punto de direccion para el cual se ha pretendido conducir el dinero, es de ampararse éste con la guia competente, quedando en caso contrario expuesta la responsabilidad del conductor, segun las leyes respectivas, y que arreglar el contraresguardo. Por las consideraciones expuestas que demuestran la procedencia en derecho, de la demanda de amparo pedido, por cuanto á que no descansando en la ley el procedimiento del Gefe de Hacienda segun tiene alegado el quejoso, las garantías invocadas por éste se han violado como asegura; con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: Primero: Se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Zacatecas pronunciada á 19 de Setiembre próximo pasado en la cual declara: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Ramon C. Ortiz contra la Gefatura de Hacienda del Estado que le negó las guias que pedia para conducir á Monterey la cantidad de quince mil quinientos sesenta y ocho pesos, veintidos centavos, por no haberse vulnerado, con la negativa, las garantías que protegen las artículos 4º, 16 y 38 de la Constitución general. Segundo: La Justicia de la Union ampara y protege al referido Ortiz, contra el procedimiento que ha designado en el presente recurso de amparo.

Devuélvansé las actuaciones al Juez de Distrito que las eleva á revision; acompañándole testimonio de esta sentencia para los

efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoria de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—José Arteaga.—Pedro Ordáz.—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico, México, Octubre 22 de 1873.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México por los CC. Ildefonso y Abundio Hernandez y otros, contra el Ayuntamiento de Tenancingo por haber ocupado sin previa indemnizacion y con el objeto de abrir una calle, varias porciones de los terrenos que poseian en el pueblo de San Martin Coapastongo.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez 1º suplente.

El Promotor fiscal dice: que los CC. Ildefonso y Abundio Hernandez, Ramon y Sixto Gonzalez, Marcial y Cosme Millan, Gabino y Acencio Salazar, Pablo Embris, José Bernardino, Tranquilino Sotelo, Camilo Castro, Juan José y Canuto Blanquel, con fecha 29 de Mayo último, promovieron el juicio de amparo por expropiacion de unos terrenos, de los cuales dispuso el Ayuntamiento de Tenancingo para abrir una calle en el pueblo de San Martin Coapastongo, de donde son vecinos los quejosos. El Ayun-